



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
27 de septiembre de 2024
Español
Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 3168/2018* ** ***

Comunicación presentada por: Gevorg Ghazaryan (representado por los abogados Arayik Ghazaryan y Meri Baghdasaryan)

Presunta víctima: El autor

Estado parte: Armenia

Fecha de la comunicación: 15 de noviembre de 2017 (presentación inicial)

Referencias: Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 27 de marzo de 2018 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen: 9 de julio de 2024

Asunto: Violencia policial contra un periodista que cubría una manifestación

Cuestiones de procedimiento: Agotamiento de los recursos internos; grado de fundamentación de las alegaciones

Cuestiones de fondo: Libertad de expresión; derecho a un recurso efectivo; discriminación basada en la profesión

Artículos del Pacto: 2, párr. 3; 19; y 26

Artículos del Protocolo Facultativo: 2 y 5, párr. 2 b)

1. El autor de la comunicación es Gevorg Ghazaryan, nacional de Armenia, nacido en 1989. Afirma que el Estado parte ha violado los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 2, párrafo 3; 19 y 26 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 23 de septiembre de 1993. El autor cuenta con representación letrada.

* Aprobado por el Comité en su 141^{er} período de sesiones (1 a 23 de julio de 2024).

** Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Tania María Abdo Rocholl, Wafaa Ashraf Moharram Bassim, Rodrigo A. Carazo, Yvonne Donders, Mahjoub El Haiba, Carlos Gómez Martínez, Laurence R. Helfer, Marcia V. J. Kran, Bacre Waly Ndiaye, Hernán Quezada Cabrera, José Manuel Santos Pais, Soh Changrok, Tijana Šurlan, Teraya Koji, Hélène Tigroudja e Imeru Tamerat Yigezu.

*** Se adjuntan al presente dictamen un voto conjunto (concurrente) de los miembros del Comité Yvonne Donders y Laurence R. Helfer y sendos votos particulares de los miembros del Comité Teraya Koji (concurrente) y Hélène Tigroudja (disidente).



Hechos expuestos por el autor

2.1 El autor es un periodista independiente que cubre sobre todo acontecimientos políticos y de interés público para agencias de noticias internacionales y regionales. El 17 de julio de 2016 se produjo un ataque armado en el edificio del Regimiento del Servicio de Patrulla y Guardia en Ereván (Armenia). Varios agentes de policía fueron retenidos como rehenes y un agente resultó herido y más tarde murió. El grupo que llevó a cabo el ataque hizo reivindicaciones políticas, entre ellas la dimisión del Presidente y del Gobierno.

2.2 Poco después del ataque, los partidarios del grupo armado empezaron a organizar acciones de protesta, concentraciones públicas y mítines de carácter pacífico. Hubo enfrentamientos ocasionales con la policía, cuyas acciones en esos enfrentamientos, según el autor, constituyeron violaciones del derecho de los manifestantes a la reunión pacífica y a la libertad personal. También se dijo que la policía recurrió a la tortura y al trato degradante durante las detenciones.

2.3 El 29 de julio de 2016 hubo una manifestación en la Plaza de la Libertad de Ereván en apoyo del grupo armado. Los organizadores pidieron a los manifestantes que se dirigieran hacia el edificio ocupado del Regimiento del Servicio de Patrulla y Guardia. La manifestación se dividió en dos grupos que tomaron rutas diferentes hacia el edificio.

2.4 La noche del 29 de julio de 2016, el autor se enteró de que los acontecimientos en Ereván se estaban intensificando y acudió a cubrir los sucesos del distrito de Sarit'agh, portando su acreditación de prensa. En un momento dado, un agente de policía pidió a los periodistas que se trasladaran a un lugar más seguro. El autor, junto con una veintena de periodistas, fue a un pequeño parque cercano desde donde hizo fotos y filmó la protesta con una cámara fotográfica y otra de video. De repente, cayó cerca de él una granada aturdidora, que hirió a otros periodistas que se encontraban en el parque. Otro explosivo causó daños en una casa y, cuando los vecinos salieron a dar parte a la policía, fueron golpeados por agentes de civil. El autor filmó ese suceso y la policía se dio cuenta. Tres o cuatro agentes se le acercaron, lo amenazaron y golpearon. Uno de ellos le arrebató la cámara de video, que cayó al suelo y se rompió. El autor intentó recuperar la tarjeta de memoria de la cámara, pero la policía se lo impidió. También se llevó su cámara fotográfica. Cuando el autor intentó enfrentarse al agente de policía que se llevó la cámara, el agente lo amenazó. El autor se dio cuenta de que la policía también estaba acosando físicamente a otros periodistas, por lo que decidió abandonar la zona.

2.5 El 30 de julio de 2016, el Fiscal General incoó la causa penal núm. 61205016 relativa a la violencia contra periodistas en virtud del artículo 164 del Código Penal “por obstruir la labor profesional lícita de los periodistas ejerciendo violencia que supone un peligro para la salud de los periodistas y por otros medios”. La Fiscalía General remitió el caso al Servicio Especial de Investigación para que realizara una investigación previa al juicio. El 3 de agosto de 2016, el Servicio Especial de Investigación inició una segunda causa penal, núm. 62220515, relativa a los sucesos del 29 de julio de 2016 en virtud de los artículos del Código Penal 308, “abuso de autoridad oficial”, y 309, “extralimitación en el ejercicio de funciones oficiales”. Ambas causas se acumularon el 3 de octubre de 2016. En el curso de la investigación, el autor fue entrevistado y se le reconoció la condición de víctima. Se inició un reconocimiento médico y un examen de la cámara, pero el autor afirma que no se le informó de los resultados. Afirma también que cuando presentó la denuncia al Comité el 15 de noviembre de 2017 no se había emprendido ninguna otra diligencia de investigación del caso.

2.6 El autor afirma que no existe ningún recurso interno efectivo en el marco de las actuaciones penales para impugnar la inacción en el proceso de investigación. El artículo 290 del Código de Procedimiento Penal dispone que un particular puede impugnar ante los tribunales las “decisiones” y “actuaciones” de los organismos de investigación, aunque no indica expresamente que no iniciar una investigación sea motivo para interponer ese recurso. Por tanto, el autor afirma que se le impide impugnar la inacción y el hecho de que el Servicio Especial de Investigación no haya llevado a cabo una investigación adecuada en un plazo razonable. Además, señala que en el Código de Procedimiento Penal no se especifica un plazo para llevar a cabo las investigaciones penales, lo que, a su juicio, aumenta la incertidumbre a la que se enfrentan las víctimas en cuanto a la duración de una investigación

penal. Por consiguiente, el autor alega que no existe un recurso efectivo en el Estado parte respecto de la violación de sus derechos.

Denuncia

3.1 El autor afirma que fue golpeado por agentes de policía, que una de sus cámaras quedó destrozada y la otra fue incautada por la policía, debido a sus actividades como periodista. Los agentes de policía sabían que era periodista y actuaron deliberadamente para obstaculizar el trabajo del autor e impedirle que informara al público sobre lo ocurrido durante la manifestación del 29 de julio de 2016, lo cual vulneraba sus derechos en virtud del artículo 19 del Pacto.

3.2 El autor afirma asimismo que se han violado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 19 del Pacto. Afirma que fue objeto de ataques y discriminación por ser un periodista que cubría un acontecimiento de interés público. También sostiene que la razón de que no se hayan iniciado diligencias de investigación en su caso es su condición de periodista.

3.3 El autor afirma asimismo que se han violado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 2, párrafo 3, leído conjuntamente con el artículo 19 del Pacto. Afirma que las denuncias que presentó contra la policía no se investigaron eficazmente y que las autoridades no han tomado medidas para investigar, identificar y castigar a los autores.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1 El 27 de diciembre de 2018, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. Sostiene que la comunicación debe considerarse inadmisibles porque no se han agotado los recursos internos ni se ha fundamentado suficientemente.

4.2 El Estado parte señala que el Servicio Especial de Investigación inició dos investigaciones penales, que posteriormente se acumularon: el 30 de julio de 2016, en virtud del artículo 164 del Código Penal, por el delito de obstaculizar la actividad profesional de los periodistas, y el 3 de agosto de 2016, en virtud de los artículos 308 y 309 del Código Penal, por abuso de autoridad oficial y extralimitación en el ejercicio de funciones oficiales por parte de agentes de policía. Durante la investigación preliminar se identificó a 106 civiles y 24 periodistas presuntamente afectados, de los cuales se reconoció la condición de víctimas a 60 civiles y 21 periodistas, y el resto de las personas identificadas comparecieron en calidad de testigos junto con 60 policías. Se reconoció la condición de víctima a todas las personas que la solicitaron, lo que permitió que participaran activamente en el proceso. El instructor practicó diversas diligencias de investigación y ordenó que los órganos de investigación realizaran actividades de búsqueda operativa para comprobar la legalidad de la actuación de la policía y la proporcionalidad del uso de “medios especiales” durante los hechos ocurridos el 29 de julio de 2016. El 18 de septiembre de 2018, el instructor decidió suspender la investigación preliminar del caso del autor debido a que “no se había identificado a un acusado”. Sin embargo, otras partes de la investigación dieron lugar a que se sometiera a responsabilidad penal a ocho personas, mientras que los procedimientos judiciales contra otro acusado seguían pendientes cuando el Estado parte formuló sus observaciones. Además, el jefe de policía incoó dos expedientes disciplinarios en relación con los sucesos de los días 17 a 28 de julio de 2016 y 29 y 30 de julio de 2016. Como resultado de la investigación disciplinaria interna, 13 agentes de policía fueron objeto de responsabilidad disciplinaria por ejercicio indebido de sus funciones, uso indebido de la fuerza y por no haber adoptado medidas suficientes para impedir el uso de la fuerza contra periodistas y los daños causados al material.

4.3 El Estado parte sostiene que el autor no ha agotado los recursos internos. Señala que, con arreglo al artículo 290 del Código de Procedimiento Penal, la víctima de un delito puede impugnar las decisiones y actuaciones de los órganos de investigación ante el fiscal supervisor y, si no lo consigue, ante los tribunales. Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, ese derecho incluye también el de impugnar la supuesta inactividad

en la investigación¹. Además, el Estado parte exige que sus leyes no sean contrarias a las sentencias del Tribunal Constitucional. El Estado parte señala que, si bien el autor, en su comunicación al Comité, afirmó que no podía impugnar la inacción de las autoridades de investigación durante el proceso, esa afirmación se contradice con el recurso que interpuso posteriormente con respecto a la decisión de suspender las actuaciones penales. Además, el Estado parte informa de que dispone de recursos administrativos en relación con las presuntas acciones ilícitas de los agentes de policía. El artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo establece que el demandante tiene derecho a solicitar que un acto administrativo sea declarado ilegal. El Estado parte admite que el autor no está actualmente en condiciones de presentar dicha solicitud ya que, según la jurisprudencia del Tribunal Administrativo, no es posible presentar una reclamación por vía administrativa mientras el mismo asunto está siendo examinado en un procedimiento penal, sino una vez que el procedimiento penal haya finalizado. El Estado parte señala que, en el presente caso, las actuaciones penales en curso impiden que el autor presente una reclamación administrativa. Alega, sin embargo, que el autor podrá presentar dicha reclamación en el futuro, una vez finalizadas las actuaciones penales. Habida cuenta de lo anterior, el Estado parte sostiene que el autor no ha agotado los recursos internos.

4.4 En cuanto a las reclamaciones del autor al amparo de los artículos 19 y 26 del Pacto, el Estado parte sostiene que, de conformidad con la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos, la eficacia de una investigación no debe estimarse por su resultado sino por las medidas y medios de investigación desplegados durante el proceso. En el presente caso, el Estado parte alega que, durante la investigación, se llevaron a cabo todas las diligencias de investigación y búsqueda operativa posibles para identificar a los presuntos autores. Se celebraron numerosos interrogatorios, se ordenaron y llevaron a cabo exámenes forenses y se informó a las víctimas de los resultados de las diligencias de investigación, dándoles la oportunidad de formular observaciones al respecto. Se examinaron debidamente todas las grabaciones de video de lo ocurrido para identificar a los autores. Sin embargo, esas medidas no proporcionaron un fundamento suficiente, con arreglo a la norma probatoria de “más allá de toda duda razonable”, para formular una acusación en el caso del autor.

4.5 El Estado parte señala que el autor no presentó ninguna petición a las autoridades durante las actuaciones de investigación. Observa, sin embargo, que el autor presentó un recurso contra la decisión del instructor de 18 de septiembre de 2018 de suspender las actuaciones penales, que, cuando el Estado parte presentó su información, estaba pendiente en primera instancia. En su recurso, el autor no especificó ninguna medida que debiera haberse adoptado durante la investigación, aparte del examen de una grabación de video que ya había sido examinada. El Estado parte toma nota de la afirmación del autor de que la razón por la que la investigación resultó ineficaz fue su condición de periodista, y sostiene que esa afirmación carece de fundamento, teniendo en cuenta que ocho personas, incluidos agentes de policía, fueron declaradas penalmente responsables como resultado de la investigación.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

5.1 El 6 de mayo de 2019, el autor presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte. Sostiene que la comunicación es admisible.

5.2 El autor toma nota de la información del Estado parte de que ocho personas estaban sujetas a responsabilidad penal y de que cuando el Estado parte presentó sus observaciones estaba pendiente de resolución el proceso contra una de esas personas. Alega, no obstante, que el Estado parte no ha especificado si alguno de esos imputados fue acusado de agresión a un periodista ni qué papel tuvieron los imputados. Dado que hubo muchas grabaciones y retransmisiones en directo de los sucesos del 29 de julio de 2016, no debería haber sido difícil identificar a los autores. Además, el autor señala que, cuando la policía lo interrogó, declaró

¹ El Estado parte hace referencia al Tribunal Constitucional de Armenia, Decisión DCC-844, 7 de diciembre de 2009.

que tal vez podría identificar a quienes le habían agredido, pero que no se le dio la oportunidad de hacerlo.

5.3 El autor hace notar que, según el Estado parte, no ha agotado los recursos internos. El autor sostiene que en la decisión del Tribunal Constitucional a la que se refiere el Estado parte no se definió la noción de “inactividad” o “inacción”, sino que se dejó que el legislador la definiera. Sin embargo, hasta la fecha, el Parlamento no ha modificado el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal para añadir el concepto de “inacción”, por lo que considera que la disposición no ofrece seguridad jurídica. Asimismo, el autor reitera su argumento de que el Código de Procedimiento Penal no especifica un plazo para llevar a cabo una investigación penal. Según el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal, las investigaciones deben realizarse en dos meses, aunque pueden durar más y no hay límite en cuanto al número de prórrogas que pueden concederse. En su caso, el autor alega que, dada la duración de la investigación previa al juicio, los recursos internos han resultado ineficaces, ya que las actuaciones se han prolongado indebidamente. El autor sostiene además que no hay contradicción en su comunicación sobre la cuestión del agotamiento de los recursos internos, ya que, una vez que recibió la decisión del instructor de suspender las actuaciones penales en su caso, la recurrió alegando que los investigadores no analizaron adecuadamente las imágenes de video ni llevaron a cabo ningún procedimiento de identificación. Durante el procedimiento de primera instancia, la autoridad investigadora alegó que sería imposible facilitar al autor fotografías de todos los agentes para que realizara una identificación, dado que había más de un millar de agentes de policía desplegados durante el suceso. El autor sostiene que la autoridad investigadora podría haber empezado por facilitarle fotografías de los 13 policías sujetos a expediente disciplinario para investigar si alguno de ellos estaba implicado en su caso. En cuanto a la cuestión de los expedientes disciplinarios, alega que tales medidas no pueden sustituir a la responsabilidad penal.

5.4 El 4 de abril de 2019, el tribunal de primera instancia desestimó el recurso del autor contra la orden de suspensión, declarando que, dado que la investigación estaba simplemente suspendida, correspondía a la autoridad investigadora decidir sobre las diligencias de investigación que debían realizarse, lo que, según el tribunal, quedaba a la entera discreción de la autoridad investigadora. El autor sostiene que la decisión del tribunal, una vez más, demuestra que los recursos internos son ineficaces, ya que el tribunal no evaluó la eficacia de la investigación antes de suspenderla. Sostiene que, por lo tanto, está claro que las autoridades investigadoras no llevaron a cabo una investigación exhaustiva, rápida y minuciosa durante los dos años que duró. En cuanto al argumento del Estado parte de que el autor podría presentar una reclamación administrativa, el autor sostiene que no es una vía adecuada para un asunto penal. Además, señala que el propio Estado parte admite que el autor no podría interponer tal reclamación hasta que no hayan finalizado las actuaciones penales.

5.5 El 5 de junio de 2020, el autor presentó más información sobre el procedimiento interno. Señaló que había recurrido la decisión del tribunal de primera instancia relativa a la suspensión de la investigación penal. El 6 de agosto de 2019, la autoridad investigadora reabrió la investigación penal; el 23 de agosto de 2019, el tribunal de apelación penal rechazó el recurso interpuesto por el autor. El 6 de mayo de 2020, el abogado del autor envió una solicitud a la autoridad investigadora pidiéndole información sobre el estado de la investigación y las medidas adoptadas para identificar a los autores. El 8 de mayo de 2020, el órgano de investigación respondió, señalando que la investigación se había vuelto a abrir y que, si hubiera alguna petición, el órgano de investigación la examinaría.

Observaciones adicionales del Estado parte

6.1 El 23 de enero de 2023, el Estado parte presentó unas observaciones adicionales sobre la comunicación. Toma nota de la afirmación del autor de que las grabaciones de video disponibles no se analizaron adecuadamente para identificar a quienes supuestamente habían agredido al autor. Informa de que las grabaciones de video disponibles no registraron la presunta agresión contra el autor y, por tanto, no pudieron utilizarse para identificar a los autores en su caso. Sostiene que la suspensión de las actuaciones penales no implica que se hayan abandonado y que, de hecho, siguen su curso, también en lo que respecta a las reclamaciones del autor.

6.2 El Estado parte reitera su argumento de que en el caso del autor se han adoptado todas las medidas prescritas en el Código de Procedimiento Penal y sostiene que se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva, completa y objetiva de las circunstancias del caso. Sin embargo, no fue posible, sobre la base de las pruebas recogidas, identificar a quien o quienes cometieron los actos delictivos en el caso del autor y, en esas circunstancias, se suspendieron las actuaciones. Toma nota de la afirmación del autor de que no fue informado de los resultados de las diligencias de investigación del caso. Señala, no obstante, que se notificó al autor que debía comparecer ante el Servicio Especial de Investigación el 16 de septiembre de 2016 para ser informado de las diligencias practicadas en el caso y de las conclusiones alcanzadas. El autor cumplió con la notificación y fue informado del resultado de las gestiones realizadas, al tiempo que declaró que “no tenía ninguna petición ni objeción”. También se enviaron notificaciones al autor para que compareciera ante el Servicio Especial de Investigación en otras fechas para informarle de las medidas adoptadas en la investigación, a saber, el 22 de agosto, el 29 de agosto y el 18 de noviembre de 2016 y el 28 de febrero y el 7 de abril de 2017. Sin embargo, el autor no compareció ante el Servicio Especial de Investigación en relación con esas notificaciones.

6.3 El Estado parte señala que suspender el procedimiento de una causa penal no supone que terminen las actuaciones penales. Al suspender las actuaciones de la causa penal, la autoridad que instruye el procedimiento trata de evitar el vencimiento innecesario de los plazos del procedimiento penal. El Estado parte observa además que, en virtud del artículo 483, párrafo 4, del Código de Procedimiento Penal, aprobado el 30 de junio de 2021, las causas penales suspendidas antes del 1 de julio de 2022 deberán reanudarse en el plazo de un año a partir de la decisión del instructor o de un tribunal y deberán investigarse en la forma que disponga el Código Penal. En el caso del autor, el Estado parte informa de que, el 5 de abril de 2022, se adoptó la decisión de suspender las actuaciones de la causa penal núm. 61205016 por “desconocerse la persona o personas que iban a intervenir como acusadas”. En enero de 2023, se reanudó de nuevo la investigación sobre la base del artículo 483 del Código de Procedimiento Penal. El Estado parte sostiene que, dado que aún no se ha dictado una decisión definitiva en el caso del autor, no se han agotado los recursos internos.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

7.1 Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

7.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

7.3 El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que el autor no ha agotado los recursos internos, ya que no impugnó la presunta inacción de las autoridades de investigación en virtud del artículo 290 del Código de Procedimiento Penal y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ante el fiscal supervisor, decisión negativa que puede recurrirse ante los tribunales. También toma nota de la información del Estado parte de que la investigación suspendida se reanudó posteriormente sobre la base del artículo 483 del Código de Procedimiento Penal y de su afirmación de que, como todavía no se ha dictado una decisión definitiva en la causa del autor, no se han agotado los recursos internos. El Comité toma nota del argumento del autor de que el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal no ofrece seguridad jurídica y no le permite impugnar la supuesta inactividad de la autoridad investigadora. También toma nota de su alegación de que, dada la duración de la investigación previa al juicio, las actuaciones se han prolongado indebidamente.

7.4 El Comité recuerda que, con arreglo al artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo, no examinará ninguna comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna de que se pueda disponer; sin embargo, no se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se

prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación de la presunta víctima². El Comité recuerda su jurisprudencia en *G. G. c. Armenia*³, en que determinó que, para que un autor agote los recursos internos en relación con una denuncia de presunta ineficacia de una investigación penal previa al juicio, el autor tiene la obligación de presentar una demanda con arreglo al artículo 290 del Código de Procedimiento Penal. El Comité observa, sin embargo, que en el presente caso la investigación se inició en julio de 2016 y desde entonces se ha suspendido y reabierto varias veces. Asimismo, toma nota de la información del Estado parte de que la investigación se reabrió de nuevo en enero de 2023 y de que aún no se ha dictado una decisión definitiva en la causa del autor. El Comité considera que, dado que habían transcurrido siete años para cuando el Estado parte presentó sus observaciones sin que hubiera concluido la investigación previa al juicio, las actuaciones se han prolongado indebidamente. En cuanto a la comunicación del Estado parte sobre la posibilidad de presentar una reclamación administrativa, el Comité toma nota de la afirmación del autor de que una decisión administrativa no es un recurso efectivo en un asunto penal, así como de la información del Estado parte de que, además, el autor no puede presentar esa reclamación mientras esté pendiente la investigación penal. Teniendo en cuenta lo que antecede, el Comité concluye que lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no obsta para que examine la comunicación.

7.5 El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que el autor no ha fundamentado sus alegaciones en virtud del artículo 19, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, y el artículo 26 del Pacto. El Comité toma nota también de la afirmación del autor en relación con el artículo 26 del Pacto, de haber sido objeto de persecución debido a su profesión de periodista y de que su profesión es también la supuesta razón de la presunta ineficacia de la investigación. Por lo que respecta a la afirmación del autor en relación con el artículo 26, leído conjuntamente con el artículo 19 del Pacto, el Comité observa que el autor no ha proporcionado información suficiente para sustentar esa alegación a los efectos de la admisibilidad. En consecuencia, declara inadmisibles esta parte de la comunicación en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

7.6 El Comité toma nota de que el autor afirmó que fue agredido por agentes de policía y que la policía se incautó de una de sus cámaras y destruyó otra, y que esos actos estaban relacionados con el ejercicio de su profesión de periodista, en violación de los derechos que lo asisten en virtud del artículo 19 del Pacto. No obstante, el Comité observa que el autor no ha fundamentado suficientemente esa reclamación y, por consiguiente, decide examinarla en virtud del artículo 19 conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. Por consiguiente, el Comité declara la comunicación admisible en lo que respecta a las reclamaciones del autor relativas al artículo 19, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

8.1 El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

8.2 El Comité recuerda el párrafo 2 de su observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, en la que afirmó que la libertad de expresión era fundamental para toda sociedad y constituía la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. El Comité recuerda también que la existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos reconocidos por el Pacto y constituye una de las piedras angulares de toda sociedad democrática⁴. El Comité recuerda además que los Estados partes deberían adoptar medidas eficaces de protección contra los ataques destinados a acallar a quienes ejerzan su derecho a la libertad de expresión y que tampoco pueden ser compatibles con el artículo 19 del Pacto, en circunstancia alguna, los atentados contra una persona por haber ejercido su derecho a la

² Véase, por ejemplo, *Amirov c. la Federación de Rusia* (CCPR/C/95/D/1447/2006), párr. 10.3.

³ *G. G. c. Armenia* (CCPR/C/124/D/3075/2017), párrs. 4.6 y 6.4.

⁴ Observación general núm. 34 (2011), párr. 13.

libertad de opinión o de expresión⁵. Recuerda que los periodistas son objeto con frecuencia de amenazas de esa índole, de intimidación y de atentados a causa de sus actividades, y que todos esos atentados deben ser objeto de una activa y puntual investigación, sus autores deben ser sometidos a juicio y debe ofrecerse una reparación adecuada a las víctimas⁶. A este respecto, el Comité recuerda el párrafo 15 de su observación general núm. 31 (2004), relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, en que señaló que los Estados partes tenían que dar efecto a la obligación general de investigar las alegaciones de violaciones con rapidez, a fondo y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales.

8.3 En el presente caso, el Comité toma nota de la afirmación del autor de que la policía lo agredió cuando llevaba acreditación de prensa y que destruyeron y requisaron tanto la cámara fotográfica como la de video. También toma nota de que el autor afirma que fue atacado debido a su actividad como periodista al cubrir la respuesta de la policía a una manifestación pública, y que la investigación del suceso fue ineficaz y sufrió numerosos retrasos. El Comité toma nota de que el Estado parte afirma que durante la investigación se llevaron a cabo todas las diligencias de investigación y búsqueda operativa posibles para identificar a los presuntos autores. Toma nota también de la información del Estado parte de que, tras el suceso, 8 personas, incluidos agentes de policía, fueron declaradas penalmente responsables como resultado de la investigación, mientras que 13 agentes de policía fueron objeto de responsabilidad disciplinaria por ejercicio indebido de sus funciones, uso indebido de la fuerza y por no haber adoptado medidas suficientes para impedir el uso de la fuerza contra periodistas y los daños causados al material. A este respecto, el Comité toma nota de los argumentos del autor de que el Estado parte no ha proporcionado ninguna información concreta sobre los enjuiciamientos y los expedientes disciplinarios y de que indicó a los investigadores de su caso que tal vez podría identificar a los autores de su agresión, pero que no se le dio la oportunidad de hacerlo.

8.4 El Comité hace notar el argumento del Estado parte de que, de conformidad con la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos, la eficacia de una investigación no debe estimarse por su resultado sino por las medidas y medios de investigación desplegados durante el proceso. También toma nota de la afirmación del Estado parte de que durante la investigación se llevaron a cabo todas las diligencias de investigación y búsqueda operativa posibles para identificar a quienes presuntamente cometieron los actos delictivos en el caso del autor. Señala además la información del Estado parte de que se celebraron numerosos interrogatorios, se ordenaron y llevaron a cabo exámenes forenses, se informó a las víctimas, incluido el autor, de los resultados de las diligencias de investigación emprendidas y se les dio la oportunidad de formular observaciones al respecto. También toma nota de la información del Estado parte de que se examinaron todas las grabaciones de video de los hechos para identificar a quienes cometieron los actos delictivos, pero que esas medidas no proporcionaron una base suficiente en el caso del autor para identificarlos.

8.5 El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que el autor no presentó ninguna petición a las autoridades de investigación durante las actuaciones de investigación para quejarse de la supuesta ineficacia de la investigación ni de ninguna diligencia de investigación específica que la autoridad de investigación supuestamente no hubiera llevado a cabo. También toma nota de que el Estado parte alega que el autor, en su recurso contra la decisión del instructor de 18 de septiembre de 2018 de suspender las actuaciones penales, no especificó ninguna medida que debiera haberse adoptado durante la investigación, aparte del examen de una grabación de video que ya había sido examinada. El Comité considera que, teniendo en cuenta la información del Estado parte sobre las diligencias de investigación que ha llevado a cabo y su argumento de que ha efectuado todas las diligencias de investigación y búsqueda operativa posibles, y que el autor no ha dado ninguna indicación concreta sobre las medidas de investigación que las autoridades del Estado parte no llevaron a cabo, no puede concluir que los hechos que tiene ante sí revelen una violación de los derechos del autor en virtud del artículo 19, párrafo 2, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

⁵ *Ibid.*, párr. 23.

⁶ *Ibid.*

9. El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que las alegaciones del autor no ponen de manifiesto una violación por el Estado parte del artículo 19, párrafo 2, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

Anexo I

Voto conjunto (concurrente) de Yvonne Donders y Laurence R. Helfer, miembros del Comité

1. Estamos de acuerdo con el Comité en que el Estado parte no violó el derecho a la libertad de expresión en el presente caso, ni por sí solo ni por la forma en que investigó tal violación. Formulamos un voto particular para tratar dos cuestiones que no están suficientemente desarrolladas en la jurisprudencia del Comité: a) el efecto inhibitor generado por los agentes del orden al confiscar, dañar o destruir teléfonos celulares, cámaras, grabadoras de video o dispositivos similares que los periodistas utilizan para informar sobre protestas y manifestaciones públicas; y b) la obligación que incumbe al Estado parte de investigar las denuncias de los periodistas que aleguen ese tipo de conducta indebida por parte de agentes del orden.

Efecto inhibitor de confiscar o dañar los dispositivos que utilizan los periodistas

2. El autor, que se había identificado como periodista, fue amenazado y golpeado por la policía, que confiscó sus cámaras, estropeó una de ellas y le prohibió recuperar la tarjeta de memoria de una cámara (párr. 2.4). Sin embargo, el autor no fue detenido, multado ni encarcelado. El Estado parte investigó los hechos relacionados con la manifestación, incluidos los malos tratos infligidos al autor, y enjuició y sancionó a varios agentes de policía (párr. 8.3).

3. No tenemos conocimiento de ninguna jurisprudencia internacional o regional en materia de derechos humanos que se ocupe *exclusivamente* de la incautación o destrucción de material de medios de comunicación como posible violación del derecho a la libertad de expresión. En la jurisprudencia existente del Comité y de los tribunales regionales, la confiscación de ese material se ha combinado con otras medidas, como la detención, el encarcelamiento, las multas o el cierre de medios de comunicación, que se evaluaron en relación con las cláusulas de limitación del derecho a la libertad de expresión¹.

4. Una cobertura mediática que permita informar al público sobre acontecimientos de interés público, incluidas las manifestaciones, sin censura ni limitaciones, es un aspecto inherente a la libertad de prensa². Los periodistas desempeñan un papel vital en el seguimiento de las protestas, no solo como observadores, sino también para recabar, verificar y difundir activamente información sobre la respuesta de las autoridades a las manifestaciones y las posibles violaciones de los derechos humanos. La presencia de periodistas en estos actos favorece la transparencia y la rendición de cuentas, y puede disuadir de cometer tales violaciones. La confiscación, incautación o destrucción del material de los periodistas restringe estas importantes funciones y podría tener un efecto inhibitor sobre la libertad de prensa, por ejemplo disuadiendo a los periodistas de cubrir acontecimientos de interés público. Los Estados partes están obligados a facilitar esa cobertura mediática y a

¹ Véanse, por ejemplo, *Tsukanov c. Kazajstán* (CCPR/C/131/D/2676/2015), párrs. 2.1 y 10.4; *Abdurakhmanov c. Uzbekistán* (CCPR/C/125/D/2295/2013), párrs. 2.4 y 7.6; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Ríos y otros vs. Venezuela*, sentencia de 28 de enero de 2009. Véanse también Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Butkevich v. Russian Federation*, demanda núm. 5865/07, sentencia de 13 de febrero de 2018; *Selmani et al. v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, demanda núm. 67259/14, sentencia de 9 de febrero de 2017; y *Pentikäinen v. Finland*, demanda núm. 11882/10, sentencia, 20 de octubre de 2015. El artículo 13, párrafo 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere explícitamente al material en relación con la libertad de expresión: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales (...) de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que con esta disposición se busca proteger la comunicación, difusión y circulación de ideas y opiniones. Véase *Ríos y otros vs. Venezuela*, párr. 340.

² Observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, párrs. 13 y 20; y observación general núm. 25 (1996), relativa a la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, párr. 25.

proteger a los periodistas de las agresiones y de la incautación o destrucción injustificada de sus equipos³. También tienen la obligación de investigar debidamente tales hechos una vez que se hayan producido⁴.

Obligación de investigar las denuncias

5. En su observación general núm. 31 (2004), el Comité de Derechos Humanos interpretó que el artículo 2, párrafo 3, imponía la obligación independiente de investigar las alegaciones de violaciones del Pacto. Una vez que las autoridades de un Estado parte tienen conocimiento de tales alegaciones, deben investigarlas con rapidez, a fondo y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales. No llevar a cabo dicha investigación podría en sí constituir una violación separada del Pacto, incluso si no se hubieran vulnerado, de hecho, los derechos de la víctima⁵.

6. El Comité aplica con mayor frecuencia estos principios a las vulneraciones graves o manifiestas del Pacto, como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las violaciones de la seguridad personal y las condiciones penitenciarias rigurosas. En esos contextos, el Comité suele concluir que los Estados partes han violado disposiciones sustantivas del Pacto conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3. Tales conclusiones se basan a menudo en la premisa de que no hay una institución nacional encargada de investigar las denuncias, los organismos o funcionarios competentes no abren una investigación o se lleva a cabo una investigación manifiestamente insuficiente o inadecuada⁶.

7. Ahora bien, la jurisprudencia del Comité ofrece una orientación limitada sobre dos cuestiones planteadas en el presente caso: a) si la obligación de investigar se aplica a las violaciones menos graves del Pacto, incluidas las de aquellas disposiciones que contienen cláusulas de limitación, como el derecho a la libertad de expresión⁷; y b) la naturaleza y el alcance de la investigación que un Estado parte debe llevar a cabo en respuesta a las denuncias de presuntas violaciones.

³ Las declaraciones y directrices regionales y las normas no vinculantes adoptadas por organizaciones no gubernamentales hacen hincapié en la importancia de permitir a los periodistas utilizar cámaras, grabadoras de video y otros dispositivos. Véanse, por ejemplo, Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, Comisión de Venecia, *Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly*, 2ª ed. (Venecia, 2010), párr. 169: “no debe impedirse que los participantes y otros terceros fotografien o graben en video la operación policial, y toda exigencia de entregar a las fuerzas del orden películas o imágenes o secuencias grabadas digitalmente debe estar sujeta a un control judicial previo”; y Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África, aprobada el 23 de octubre de 2002 por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en su 32º período de sesiones ordinario, art. XI (1): “la destrucción material de las instalaciones de comunicaciones socava el periodismo independiente, la libertad de expresión y la libre circulación de información al público”. Véanse también Article 19, “International standards: regulation of media workers”, puede consultarse en <https://www.article19.org/resources/international-standards-regulation-media-workers/>; y European Centre for Press and Media Freedom, “Press freedom police codex” (2020), puede consultarse en https://policecodex.eu/wp-content/uploads/2020/09/Police-Codex_mail.pdf.

⁴ *Butkevich v. Russian Federation*, párr. 123; *Selmani et al. v. the former Yugoslav Republic of Macedonia*, párr. 75; *Pentikäinen v. Finland*, párrs. 89 y 107; y Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África, art. XI (2). Véase también Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “Briefer on human rights in the context of protests for journalists”, pág. 2.

⁵ Observación general núm. 31 (2004), relativa a la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, párr. 15.

⁶ Véanse, por ejemplo, *Mechani c. Argelia* (CCPR/C/107/D/1807/2008), párr. 8.10; *Bahadur Maharjan c. Nepal* (CCPR/C/105/D/1863/2009), párr. 8.8; y *Traoré c. Côte d'Ivoire* (CCPR/C/103/D/1759/2008), párr. 7.6. Véase también la observación general núm. 20 (1992), relativa a la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, párr. 14 (las denuncias de presuntas violaciones del artículo 7 “deberán ser investigadas con celeridad e imparcialidad por las autoridades competentes”).

⁷ El artículo 19 dispone que el derecho a la libertad de expresión “puede estar sujeto a ciertas restricciones (...) que deberán (...) estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; [o] b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

8. Con respecto a la primera cuestión, el deber de investigar debería aplicarse, en principio, a cualquier disposición del Pacto que haya sido vulnerada. Las obligaciones descritas en la observación general núm. 31 (2004) se expresan en términos generales y no se limitan a un subconjunto de artículos del Pacto o a determinado tipo de vulneraciones. En el caso concreto de la libertad de expresión, el Comité concluyó que se habían cometido violaciones del artículo 19 en conjunción con el artículo 2, párrafo 3, en casos de violencia, acoso, persecución penal o sanciones económicas⁸. Del mismo modo, en su observación general núm. 34 (2011), el Comité instó a los Estados partes a investigar de manera activa y puntual todos los “atentados” contra periodistas y defensores de los derechos humanos, entendiendo por “atentados” la detención arbitraria, la tortura, las amenazas de muerte y el asesinato⁹.

9. Los hechos que expone el autor en el presente caso no implican un “atentado” en este sentido estricto y, como se ha mencionado anteriormente, el autor no fue detenido, procesado penalmente ni multado por informar sobre la manifestación. No obstante, creemos que el Estado parte estaba obligado a abrir una investigación para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 19, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, como hicieron las autoridades nacionales en el presente caso.

10. En cuanto a la segunda cuestión —la naturaleza y el alcance de las investigaciones de las violaciones menos graves del Pacto—, en el párrafo 15 de la observación general núm. 31 (2004) se establece que las investigaciones deben efectuarse con rapidez, a fondo y de manera efectiva mediante órganos independientes e imparciales. Las decisiones del Comité y la jurisprudencia de otros órganos internacionales de derechos humanos proporcionan más orientación. Las autoridades nacionales tienen la obligación general de investigar de buena fe¹⁰. Al decidir si abren o no una investigación deben tener en cuenta todas las fuentes pertinentes, incluida la información facilitada por el denunciante¹¹. Una vez iniciada la investigación, debe llevarse a cabo con celeridad y debe darse a la víctima y a los testigos una oportunidad real de participar en los procedimientos¹². Aunque la decisión de interrumpir una investigación o archivar un proceso penal no implica en sí misma una violación del Pacto, las autoridades nacionales deben dar una explicación plausible de tal decisión¹³. Por último, la investigación y sus resultados deben someterse a un escrutinio público adecuado para garantizar la rendición de cuentas¹⁴.

11. En nuestra opinión, las autoridades nacionales de Armenia cumplieron adecuadamente estos principios y el Comité rechaza debidamente las deficiencias específicas alegadas por el autor en relación con la realización de la investigación (párrs. 8.4 y 8.5). No obstante, consideramos importante subrayar el efecto inhibitorio de las incautaciones policiales o la destrucción de los dispositivos utilizados por los periodistas, y orientar a los Estados partes sobre la naturaleza y el alcance de la obligación de investigar tales conductas indebidas.

⁸ Véanse, por ejemplo, *Njaru c. el Camerún* (CCPR/C/89/D/1353/2005), párrs. 6.1 a 6.4 (periodista agredido, torturado y detenido por publicar artículos periodísticos en que denunciaba la corrupción y la violencia de las fuerzas de seguridad); *Kouider Kerrouche c. Argelia* (CCPR/C/118/D/2128/2012), párr. 8.9 (funcionario que denunció malversación y corrupción dentro de una empresa pública, fue condenado a 18 meses de prisión y multado por desacato); y *Pérez Barriga y otros c. el Ecuador* (CCPR/C/136/D/3267/2018), párr. 9.6 (propietarios y directivos de un diario y de medios de comunicación sometidos a restricciones desproporcionadas aplicadas mediante sanciones administrativas y multas).

⁹ Observación general núm. 34 (2011), párr. 23.

¹⁰ *Croes c. los Países Bajos*, comunicación núm. 164/1984, párr. 10.

¹¹ *Kalamiotis c. Grecia* (CCPR/C/93/D/1486/2006), párr. 7.3.

¹² *Ibid.*, párr. 7.2. Véase también Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Cantoral-Huamán y García-Santa Cruz vs. Perú*, sentencia de 10 de julio de 2007, párr. 190.

¹³ Kresimir Kamber, *Prosecuting Human Rights Offences: Rethinking the Sword Function of Human Rights Law* (Brill-Nijhoff, 2017), pág. 130; y *Benítez Gamarra c. el Paraguay* (CCPR/C/104/D/1829/2008), párr. 7.5.

¹⁴ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Jordan v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*, demanda núm. 24746/94, sentencia, 4 de agosto de 2001, párr. 109.

Anexo II

Voto particular (concurrente) de Teraya Koji, miembro del Comité

1. Mi valoración coincide con las conclusiones y con la justificación principal del Comité. No obstante, en la línea del voto conjunto de la Sra. Donders y el Sr. Helfer, considero que hay que profundizar en la obligación del Estado parte de investigar.
2. Los Estados partes en el Pacto están obligados a realizar investigaciones, como recuerda el Comité en el párrafo 15 de su observación general núm. 31 (2004) y en el párrafo 23 de su observación general núm. 34 (2011) (párr. 8.2). Esa obligación debe interpretarse en sentido amplio, sin ceñirse a los elementos específicos recogidos en esas observaciones generales, y puede deducirse directamente del artículo 2, párrafo 3, por implicación necesaria. Las obligaciones contraídas en virtud del Pacto, incluidas las previstas en el artículo 19, se garantizan mediante mecanismos judiciales y administrativos (observación general núm. 31 (2011), párr. 15) que, naturalmente, entrañan procedimientos penales acompañados de actuaciones penales. Es decir, se exige a los Estados partes que ejerzan adecuadamente sus competencias policiales, lo que abarca de manera intrínseca la realización de investigaciones cuando existan denuncias de conducta policial indebida, independientemente de la gravedad del delito. Esta postura, combinada con la importancia de la libertad de expresión y el papel crucial de los periodistas, implica que los Estados partes deben intensificar el grado y alcance de sus obligaciones de investigación.
3. Una de las razones por las que el Comité consideró que el Estado parte no había cometido ninguna violación fue que el autor no aportó argumentos sobre las diligencias de investigación específicas que las autoridades del Estado parte no habían llevado a cabo (párr. 8.5). Sin embargo, es crucial reconocer que el autor carece de las herramientas de investigación de que dispone la policía. Además, la situación se complica aún más por la confiscación de la cámara, herramienta vital para un periodista, que fue utilizada en contra del autor. La solicitud del autor de que se identifique a quienes cometieron los actos delictivos y se aclare el reparto de funciones (párr. 5.2) es importante para las garantías de no repetición (observación general núm. 31 (2011), párr. 16), que son parte del recurso efectivo. Cabe destacar que no se pudo identificar más allá de toda duda razonable a los autores a partir del video (párrs. 4.4 y 8.4), lo que más bien haría más conveniente que las autoridades preparasen en el futuro únicamente un registro de video incompleto. Si bien el hecho de que ocho personas, entre ellas agentes de policía, fueran declaradas penalmente responsables sugiere que quizá el Estado parte haya adoptado medidas eficaces o investigado “de buena fe” (voto conjunto de la Sra. Donders y el Sr. Helfer, párr. 10), es difícil determinar si ese grado de rendición de cuentas es suficiente para demostrar que el Estado parte cumplió su obligación de investigar, especialmente teniendo en cuenta la alegación del autor de que se desplegaron más de un millar de agentes de policía (párr. 5.3).
4. Dicho de otro modo, es posible que el Estado parte no haya cumplido plenamente su obligación o, como mínimo, podría cumplirla mejor. Dado que el propio Estado parte afirma que no se han agotado los recursos internos, cabe esperar que puedan dictarse nuevas decisiones internas, incluidas las relativas a la obligación de investigar.

Anexo III

Voto particular (disidente) de Hélène Tigroudja, miembro del Comité

1. No puedo suscribir el razonamiento del Comité en el presente caso relativo a la falta de seguridad de un periodista que cubría actos públicos. Por otra parte, comparto la conclusión de que el Estado no cometió falta en lo que respecta a la investigación interna. El razonamiento es minimalista y está en contradicción con las normas internacionales de protección de la seguridad de los periodistas. Ese enfoque minimalista es alarmante y debe leerse junto con el voto disidente que expresé acerca del dictamen aprobado en la comunicación núm. 3039/2017, en que a mi juicio el Comité también debería haber hecho más por proteger la libertad de prensa¹.

2. En el presente caso, los hechos —no rebatidos— revelan varios elementos fundamentales al considerar las obligaciones del Estado en materia de libertad de prensa: a) el autor es un periodista que se ocupaba de cuestiones de interés público (párr. 2.1); b) cuando se produjo el enfrentamiento con los agentes de policía, el autor estaba ejerciendo su profesión y cubriendo las protestas (párr. 2.4); c) el autor portaba una acreditación de prensa que lo identificaba claramente como periodista (párr. 2.4); d) el autor filmó las protestas y los malos tratos que infligió la policía a los residentes (párr. 2.4); y e) unos agentes de policía se acercaron al autor, que fue amenazado y golpeado, y su cámara terminó siendo confiscada (párr. 2.4). El autor decidió abandonar la zona (párr. 2.4).

3. El autor planteó al Comité varias violaciones del Pacto, incluida una violación del artículo 19 leído por separado. Sin embargo, en el párrafo 7.6, el Comité llegó a la conclusión de que esa parte de la reclamación no era admisible, ya que el autor no la había fundamentado suficientemente. El Comité no indica qué elementos adicionales podrían haber fundamentado la reclamación.

4. Estoy en desacuerdo con la conclusión por tres razones principales. En primer lugar, el Comité trata los hechos solo en su dimensión procesal, es decir, tratando únicamente la alegación de que no se ha investigado, y deja de lado el hecho de que se atacara violentamente a un grupo de periodistas identificados como tales mientras desempeñaban su labor. Los hechos se exponen claramente en varias partes de la decisión (párrs. 2.4 y 8.3), pero no se tienen en cuenta. No deseo especular sobre la elección de centrarse en las dimensiones procesales del caso. Ahora bien, sobre la base del precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su tendencia a considerar únicamente las dimensiones procesales de las violaciones de los derechos humanos, que da lugar a una gran deferencia hacia los Estados², parece ser una señal alarmante.

5. En segundo lugar, el enfoque minimalista es contrario a las propias normas del Comité, desarrolladas en sus observaciones generales núm. 34 (2011) y núm. 37 (2020). Como destacó el Comité en el párrafo 13 de su observación general núm. 34 (2011), la existencia de medios de prensa y otros medios de comunicación libres y exentos de censura y de trabas es esencial en cualquier sociedad para asegurar la libertad de opinión y expresión y el goce de otros derechos reconocidos por el Pacto. Es una de las piedras angulares de toda sociedad democrática. De manera más explícita, el Comité afirmó en su observación general núm. 37 (2020) que “[n]o se (...) puede prohibir o limitar indebidamente [a los periodistas] el ejercicio de esas funciones, en particular en lo que respecta a la vigilancia de los actos de los agentes del orden. No deben ser objeto de represalias ni de otro tipo de acoso, y su equipo

¹ Véase *N. S. c. Kazajstán* (CCPR/C/140/D/3039/2017).

² Véase O. M. Arnardottir, “The ‘procedural turn’ under the European Convention on Human Rights and presumptions of Convention compliance”, *International Journal of Constitutional Law*, vol. 15, núm. 1, 1 de enero de 2017.

no debe ser confiscado ni dañado”³. La presente comunicación es un claro caso de libro de un periodista identificado que cubre una protesta, filma o graba el comportamiento de los agentes de policía y es objeto de persecución y acoso a causa de esas acciones. El Comité debería haberla analizado como tal, es decir, como una violación por parte del Estado de sus obligaciones de no prohibir a un periodista que ejerza sus funciones y de no prohibir la difusión de información de interés público.

6. En tercer lugar, el enfoque minimalista no solo contraviene las propias normas del Comité, sino también las normas internacionales aplicables a la protección de la libertad de expresión, en general, y a la protección de la seguridad de los periodistas, en particular. Es evidente, en efecto, que el acoso —ya sea acoso físico o verbal, amenazas, incautación de material— a periodistas mientras cubren una manifestación no solo causa un efecto inhibitorio sobre la libertad de prensa, sino que constituye un claro incumplimiento de la obligación de los Estados de no obstaculizar el libre ejercicio de la actividad periodística y de preservarla de ataques indebidos por parte de la policía. No hay ambigüedad alguna en la jurisprudencia de los organismos regionales y en la práctica de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura sobre la protección de la seguridad de los periodistas⁴. Como resumió claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *Bedoya c. Colombia*, “[...] para que la prensa pueda desarrollar su rol de control periodístico debe no solo ser libre de impartir informaciones e ideas de interés público, sino que también debe ser libre para reunir, recolectar y evaluar esas informaciones e ideas. En su informe de 2012 [...], el Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión se refirió a que las personas que desarrollan una actividad periodística ‘observan, describen, documentan y analizan los acontecimientos y documentan y analizan declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto’. Lo anterior implica que cualquier medida que interfiera con las actividades periodísticas de personas que están cumpliendo con su función obstruirá inevitablemente con el derecho a la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva”⁵. Esas palabras se hacen eco de lo afirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en *Najafli c. Azerbaiyán*, por ejemplo, donde se puso de relieve que las medidas públicas que impiden a los periodistas realizar su trabajo pueden plantear problemas en virtud del artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos)⁶.

7. Habida cuenta de estos antecedentes jurídicos internacionales y los hechos no rebatidos del presente caso, no puedo compartir el planteamiento ni la conclusión del Comité. La reclamación en virtud del artículo 19 está suficientemente fundamentada y da lugar a una violación de la disposición leída por separado.

³ Observación general núm. 37 (2020), párr. 30 (énfasis añadido y nota a pie de página original omitida).

⁴ Véase el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, puede consultarse en <https://www.unesco.org/es/safety-journalists/un-plan-action>.

⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Bedoya Lima y otra vs. Colombia*, Sentencia, 26 de agosto de 2021, párr. 107 (énfasis añadido y nota original omitida). Véase también la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información en África, adoptada en 2019 por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (principio 20).

⁶ Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Najafli v. Azerbaijan*, demanda núm. 2594/07, sentencia, 2 de octubre de 2012, párr. 68. véanse también, especialmente, los párrs. 64 a 70.